



De izquierda a derecha, Arturo Rojas, socio de la consultora Afi; Nuño Rodrigo, subdirector de CincoDías; Lucas Arangüena, responsable global de finanzas sostenibles de Banco Santander, y Enrique Castelló, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Complutense.
JUAN BARBOSA

tis en la producción de baterías, así como el aterrizaje de Microsoft (que ya invirtió 1.600 millones en la Comunidad de Madrid y que hará otra en Aragón por 6.500 millones) o Amazon para construir grandes centros de datos. "Es crucial crear un marco legal y regulatorio que atraiga la inversión de grandes actores internacionales y que, además, la retenga", sostuvo Arangüena.

Durante el foro se trató también la importancia de los contratos de compra de energía (PPA) para garantizar la estabilidad de precios y fomentar la inversión en renovables. Un PPA es un acuerdo a largo plazo entre un productor de energía renovable y un comprador, en el que se establece un precio fijo para la energía durante un periodo determinado, generalmente entre 10 y 25 años. Este tipo de contrato proporciona estabilidad financiera tanto al productor, que asegura ingresos constantes, como al comprador, que obtiene energía a un precio predecible. De hecho, el socio de la consultora Afi destacó que España es líder mundial en este tipo de contratos, lo que ha permitido a las empresas mantener sus niveles de producción, incluso durante la crisis energética

provocada por la guerra en Ucrania.

La financiación necesaria para el desarrollo, construcción y puesta en marcha de proyectos de energías renovables es esencial para materializar los planes de instalación de renovables establecidas en el marco del Plan Nacional de Energía y Clima. Hoy en día la mayor parte de los proyectos de generación mediante energías limpias, desarrollados por promotores independientes o de menor capacidad financiera, necesitan recurrir a financiación externa para cubrir los costes de inversión. Financiación que es actualmente facilitada por entidades financieras, fondos de deuda e inversores institucionales.

Y aunque España está en pleno proceso de reindustrialización, Rojas explicó que no deja de ser curioso que el consumo de energía esté en los mismos niveles de hace 20 años. "Aunque ha habido mejoras en eficiencia y un aumento en el autoconsumo, la demanda eléctrica debe crecer para permitir la electrificación y descarbonización. De hecho, la transformación del sector energético es más efectiva con una demanda creciente", remarcó Rojas.

Buscar un modelo de precios regulados de luz

► **Garantizar la estabilidad.** Una de las necesidades más acuciantes es la de avanzar en la capacidad tecnológica de almacenamiento de electroquímicos y la implementación de un nuevo modelo de precios regulados de luz. "El almacenamiento es clave para garantizar la estabilidad del suministro energético", explicó Rojas. Y puntualizó que se "necesita un marco regulatorio que fomente la inversión en tecnologías de almacenamiento y permita una mayor flexibilidad en la gestión de la demanda".

► **Colaboración.** A solo cinco años de 2030, la necesidad de estrechar la colaboración entre el sector público y privado para alcanzar los objetivos de descarbonización y aprovechar las oportunidades que ofrece la transición energética crece. "La transición hacia una economía sostenible es un reto muy complejo, pero también una oportunidad única para España de posicionarse como líder de una transformación tan urgente como necesaria", concluyó Rodrigo en el encuentro.

Legislación que promueva la inversión sostenible

J. P. Q.
MADRID

Algunos proyectos legislativos han favorecido la financiación de estos proyectos en España, beneficiando a proyectos de más de 45 gigavatios. Uno fue el que se publicó en el BOE, el Real Decreto Ley 8/2023, que extiende los plazos administrativos del Real Decreto Ley 23/2020 en materia de energía. Esta nueva norma amplió el plazo para obtener la autorización administrativa de construcción hasta el 25 de junio de 2024 y permite solicitar una extensión de hasta 36 meses adicionales para la autorización administrativa de explotación.

Esta reforma legal, altamente esperada, permitirá un despliegue ordenado de instalaciones renovables en el sistema eléctrico español. El Ministerio de Transición Ecológica ha mostrado coherencia al escuchar las demandas del sector, contribuyendo a que España continúe siendo un referente en energías renovables. Además, como se espera que el BCE siga la senda de

recorte de tipos de interés en la eurozona, los costes aplicados por las entidades financieras y fondos sería menor, lo que beneficiaría a los desarrolladores de energías renovables con menores cargas financieras y mayores posibilidades de apalancamiento en deuda.

Sin embargo, también hay medidas que se perciben como menos favorables, como la reactivación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica con un tipo impositivo del 7% (en vigor desde de julio de 2024), y los nuevos impuestos autonómicos en el País Vasco y Aragón. Estas medidas podrían encarecer los proyectos y afectar la confianza de los inversores.

Al cierre del panel se abordaron temas como el exceso de regulación en Europa y la necesidad de simplificar las normativas para facilitar la inversión. "Hemos llegado a un punto de sobrerregulación que dificulta la inversión y la innovación", afirmó Castelló. Y se discutió la importancia de redefinir la red eléctrica en España para adaptarse a la creciente demanda de instalaciones de hidrógeno, carga de vehículos eléctricos y centros de datos. "La red eléctrica se ha quedado pequeña ante el aluvión de peticiones para conectar nuevas instalaciones", señaló Arangüena.

Es clave redefinir la red eléctrica en España para atender las nuevas demandas, según los expertos

Algunas medidas fiscales podrían encarecer los proyectos y afectar a la confianza de los inversores